

4-XI-70 • 11-IX-73: UNA EXPERIENCIA EN UN PROCESO ABIERTO

El 4 de septiembre de 1970, Salvador Allende fue elegido presidente de la República de Chile con un 36,3 por 100 de los votos expresados; Jorge Alessandri, representante de la derecha, obtenía un 34,9, y Radomiro Tomic, de la democracia cristiana —situada entonces en un centro liberal—, el 27,8. Constitucionalmente, el candidato de la Unión Popular, Salvador Allende, no podía ser proclamado presidente porque no había obtenido la mayoría absoluta: necesitaba la ratificación del Congreso; la obtuvo el 24 de octubre por 153 votos a favor, 35 en contra y 7 abstenciones. Y el 4 de noviembre tomaba posesión de su cargo de manos de su antecesor, Eduardo Frei, de la democracia cristiana. Frei entregaba a Allende algo más que un cargo: ponía en sus manos un país económicamente maltrecho y una conjura, un complot en marcha. Las amenazas de golpe de Estado militar son anteriores a Allende, previas a las elecciones. En octubre de 1969, casi un año antes de las elecciones, el general Roberto Viaux inició un movimiento con dos regimientos y fue derrotado. Desde los medios de la democracia cristiana gobernante se habló de que estaba detrás la mano de los Estados Unidos, que temía que sus intereses fuesen alcanzados por las reformas de un gobierno que se presentaba como protagonista de la «revolución en libertad» y que había inventado el vocablo «chilenización» para ejercer un control moderado, temeroso y relativo sobre las empresas extranjeras, especialmente sobre las poseedoras de las minas de cobre. Unos meses después, en marzo, otro general intentó la aventura: Gamboa, con un grupo de oficiales. Fueron detenidos antes de pasar a los hechos. Más tarde, en el interregno de la elección de Allende y su ratificación por el Congreso, fue asesinado el general Schneider, que había declarado su voluntad de mantener al Ejército dentro de la legalidad y del respeto a las instituciones elegidas por el pueblo. Este asesinato perpetrado por la extrema derecha debía dejar el paso franco a un golpe militar, que no se produjo. Otros grandes temas de inquietud social llevaban años merodeando por Chile, como consecuencia de la situa-

ción social. La extrema izquierda —el MIR—, declarada fuera de la ley, apoyaba los movimientos de reivindicación populares, muchos de ellos consistentes en la ocupación de terrenos —fundos—, muchos de ellos descuidados por sus propietarios. El gobierno de Frei había reaccionado con energía a estos actos, con una energía grave; en marzo de 1969 había sucedido la «Matanza de Puerto Montt», en la que fueron muertas a balazos nueve personas que habían ocupado un terreno que no era de su propiedad.

La situación económica que heredaba Allende de Frei consistía en un país con una inflación que ocupaba el segundo lugar del mundo —precedida por Israel— y un alza de precios que era también el segundo del mundo —el primero, el de Vietnam del Sur—. Frei no había sido capaz de llevar adelante la reforma agraria que había prometido. La paralización se la reprochaba su propio partido: Chonchol, encargado por Frei de la reforma, había dimitido acusando al gobierno de frenar su esfuerzo. La chilenezación se había contenido también: en junio de 1969, Frei llegó a un acuerdo con la Anaconda —la compañía minera de capital de Estados Unidos— para dejar para más adelante el proyecto de nacionalización. Junto a estas incapacidades políticas y económicas, las naturales se habían sumado en los últimos momentos del mandato de Frei: una larga sequía, que había matado ganados, secado campos, había detenido la producción de la energía eléctrica y, por consiguiente, el trabajo en las minas de cobre. Es curioso que esta recesión impuesta así por la Naturaleza no pudo contener la inflación.

Estas circunstancias en que Allende recogía el país se agravaron inmediatamente por una acción de las clases privilegiadas que se llamó «violencia blanca»: un período que no ha cesado nunca, en realidad. Fue una meditada organización del caos. En una semana, 87 millones de dólares salieron del país, que fue abandonado por catorce mil personas. Los Bancos restringieron sus créditos; luego los cortaron completamente. Numerosas industrias cerraron voluntariamente, hasta el punto de que la producción industrial se redujo en

un 9 por 100. Comenzó inmediatamente a acusarse al marxismo —que no había aparecido en escena, ni realmente aparecería nunca en Chile— de causar estos desastres económicos. Un aumento de salarios que decretó más tarde Allende —que en realidad no era más que una actualización, después del largo bloqueo con que Frei había intentado contener la inflación— fue declarado como culpable del caos.

Para obtener la ratificación del Congreso, Salvador Allende produjo entonces un pacto con la democracia cristiana. El pacto consistía esencialmente en que la reforma constitucional prevista por la Unidad Popular fuese revisada por la democracia cristiana; que la prensa podría continuar gozando de libertad, los partidos políticos en plena posesión de sus recursos y actividades, los calendarios electorales respetados y la universidad y los tribunales de justicia gozando de autonomía. Puede decirse que el pacto fue respetado por Allende desde el primer momento hasta su caída, aun después del momento en que fue abandonado por la democracia cristiana. Con esta acción política, el presidente de la Unión Popular evitaba la formación de un contrafrente que suponía la unión de las derechas clásicas con la democracia cristiana, pero quedaba preso de ésta. La alianza de la derecha se producía, sin embargo, más tarde.

De esta forma, Salvador Allende lanzó su primer programa de gobierno. Moderado. Habló de que el régimen debía ser «una transición hacia el socialismo», nunca de que fuese el socialismo, y que trataría de poner en pie las reformas que la democracia cristiana había programado, pero no había conseguido. Un solemne Tédeum en la catedral de Santiago fue uno de sus primeros actos públicos, y a él asistió su primer gobierno en pleno: cuatro socialistas, tres comunistas, tres radicales, un demócrata cristiano —a la izquierda, disidente del partido— y cuatro independientes.

Las primeras medidas de Allende se dirigieron hacia la nacionalización de las empresas extranjeras. En el mes de diciembre se nacionalizaban las minas de la Anaconda y la Kennecott, las de Chuquimata y El Salvador, las acerías de la

Pacific Steel, las minas de carbón de Cota Schwagen. Más tarde, las minas de hierro de la Bethlehem Iron. Estas medidas fueron aprobadas por el Congreso. En cambio, se comenzó a producir la obstrucción cuando Allende intentó la estatificación de la Banca privada, a la que acusaba de dificultar las operaciones y la fluidez del dinero, y cuando amenazó con el control del estado para las industrias privadas que fueran culpables de mala gestión. Intentaba Allende así más que nacionalizar, evitar el boicot industrial que había comenzado desde que fue elegido.

Al mismo tiempo que encontraba las primeras y serias dificultades con la democracia cristiana, sin la cual no podría tener el control del Congreso, Allende experimentaba también los primeros problemas en el seno de su coalición, y con los movimientos revolucionarios de la izquierda. Desde los primeros momentos, estos últimos habían emitido sus dudas acerca de la posibilidad de cambiar las estructuras sociales y económicas del país por los medios que consideraban reformistas. La urgencia de las clases agrícolas y de un subproletario urbano —formado por el éxodo hacia las ciudades de los trabajadores del campo— no se correspondían con la lentitud de las reformas emprendidas, según estos grupos de izquierda. Entre los socialistas y los comunistas del gobierno había también discrepancias con respecto a las nacionalizaciones: los comunistas recomendaban un camino más lento y más moderado que los socialistas. Allende se vio obligado a realizar varias veces reajustes ministeriales, procurando conservar la misma dosificación entre carteras y partidos.

En 1971 las nacionalizaciones quedaban concluidas. El 11 de julio, cuando el Congreso votó la decisión por la cual todo el cobre se convertía en «propiedad exclusiva, inalienable e imprescriptible» del Estado chileno, fue proclamado Día de la Dignidad Nacional. Ese mismo día los Estados Unidos declaraban la guerra económica a Chile, y en agosto suspendían oficialmente todos los créditos y todos los préstamos. Chile había decidido que el valor oficial a pagar a la Anaconda y a la Kennecott por



sus minas era de 700 millones de dólares; pero que estas compañías debían entregar a Chile 724 millones por beneficios ilegales —ocultación de «royalties» que debían haber vertido al Estado en los años anteriores—, de manera que las compañías de Estados Unidos no sólo perdían sus minas sin obtener nada a cambio, sino que además se encontraban deudoras de 24 millones de dólares al Estado chileno.

Sin embargo, estas medidas podrían resultar favorables a largo

plazo a la economía chilena, pero no resolvían las crisis económicas inmediatas. Por el contrario, los bloqueos de fondos chilenos por los Estados Unidos, las manipulaciones en el mercado internacional del cobre y el obstruccionismo interior de la Banca y la industria privada, más la imposibilidad de recuperar los graves daños económicos heredados de los años anteriores no ponían a flote las bolsas de los chilenos. El 5 de julio de 1971 estallaron las primeras

huelgas obreras en Chile: en las minas de carbón de Lota, donde 10.000 obreros reclamaban una subida de salarios del 70 por 100, y las huelgas se extendían a las minas de cobre. Las alzas de los salarios otorgadas por Allende parecían insuficientes a los obreros, pero habían provocado un ciclo de descompensaciones bastante inquietante. En primer lugar un aumento de consumo necesario en unas clases secularmente hambrientas y miserables, a las que difi-

cilmente se podía convencer de que continuasen en la misma situación para favorecer un futuro que por otra parte estaba amenazado por la derecha, habían obligado a la importación de productos alimenticios; unido a la caída de los precios internacionales del cobre por la actuación de los Estados Unidos se producía un descenso de las exportaciones y un aumento de las importaciones. Por lo tanto, un descenso importante en las reservas monetarias y una devaluación de la moneda nacional. Simultáneamente esta nueva capacidad de consumo de las mayorías secularmente pobres y la necesidad de restringir las importaciones comenzaban a producir los primeros síntomas de escasez. Las clases privilegiadas que hasta ese momento habían podido consumir ampliamente, sin grandes reparos sobre si era a costa de las clases desfavorecidas, comenzaron a notar la escasez y sus periódicos anunciaron que, por primera vez en su historia, Chile sufría de escasez de alimentos: en realidad, los que por primera vez sufrían de alguna escasez eran ciertas clases, mientras otras comenzaban a salir de ella. Pero las clases privilegiadas conservaban suficiente capacidad económica como para consumir con el viejo sistema de pagar más; los precios se elevaban a pesar de los controles, aparecía el mercado negro, y nuevamente las clases desfavorecidas se encontraban con su problema. Pero concederles nuevos aumentos de salarios equivalía a lanzar de nuevo el terrible ciclo. Las «marchas de las cacerolas», en las que las damas de la derecha desfilaban mostrando su menaje de cocina vacío como una exhibición de hambre, resultaron de un gran efecto propagandístico, aunque revelaban una considerable impudicia, porque el hambre y las ollas —de barro— vacías seguían estando en Chile en el mismo lado.

La democracia cristiana, ante estas dificultades de Allende, optó ya por el paso a la oposición. Algunas elecciones parciales favorecieron a sus candidatos en circunstancias clásicas. No toda la democracia cristiana estaba conforme con este salto a la oposición, con la ruptura del pacto con la Unidad Popular. En junio de 1971 se fundó el Movimiento de Izquierda Cristiana, que debía separarse de la democracia cristiana clásica. Entre los partidos de la oposición y del poder se produjeron una serie de reajustes, de disidencias, de cambios de etiqueta de algunos políticos. Tendían hacia la bipolarización del país en una izquierda y una derecha. Estos reajustes y cambios se acreditarían tras un hecho político de gran trascendencia: la visita de

La Capilla siXtina

ALLENDE, VISCONTI, PECKINPAH

Tenia sentido de la línea perpendicular. Caminaba con aplomo, con la cabeza muy en su sitio, la mirada fría tras las dioptrías, y sabía estar como sólo saben estar las personas muy y muy bien educadas. Tenía tradición cultural. Pertenecía al mismo estamento social que la plana mayor de la oposición y de la reacción. De esa pertenencia le quedaba un respeto tremendo por la cultura y la afición de coleccionista con posibles, preferentemente de objetos arcaicos chinos y peruanos. Era un buen conversador, amable, irónico, dácil, capaz de soportar las bromas de su amigo Eduardo Frei sobre el paraíso socialista e incapaz de hacerle bromas al Nuncio de Su Santidad sobre el otro paraíso. Era un gran polemista.

Si se hiciera una película sobre su vida y su muerte, yo proponería que la primera parte la realice Visconti, y la segunda y última, Peckinpah. Iria bien esa morosidad refinada y lírica de Visconti para contar cómo nace la vocación política en un joven estudiante de medicina allá por los años veinte y cómo la década de los treinta termina de concienciarle y meterle en el partido socialista chileno. La década de los treinta fue óptima para la socialdemocracia latinoamericana. Había salido del pleito escisionista con los comunistas con mayor radicalidad que la socialdemocracia europea, pero con el mismo repudio antistaliniano. El joven Allende, porque estoy hablando de Allende, pudo proyectar en aquel partido su conciencia moral indignada por el espectáculo de la injusticia social sin perder su repugnancia culturalizada por la violencia y la arbitrariedad del poder. La norma democrática le parecía una garantía para evitar la dictadura del poder de las élites o de las personalidades. Durante muchas convocatorias electorales se presentó al frente de su partido y de coaliciones izquierdistas, y siempre supo perder según sus principios ideológicos y un algo más, un "savoir faire", un sentido del "fair play" que le aporta la cultura y una educación musical que ya desde la infancia ha-

dado a los paisajes naturales y humanos un movimiento de "allegro moderato". Cada vez que perdía una convocatoria electoral felicitaba a los vencedores, incluso intercambiaba palmadas en la espalda con Frei o Tomic. Y cuando ganó esperó el mismo trato, recibió el mismo trato inicialmente. Allende era consciente de que había recibido un terreno previamente delimitado, codificado por sus antagonistas históricos. Sabía que no había escogido el terreno y no cesaba de recordárselo a los impacientes jóvenes del MIR: "No caigáis en el error del mayo francés. No hemos elegido el terreno. Lo hemos recibido. Tenemos el Gobierno, pero no el poder".

Allende tenía la virtud de inspirar confianza. Es una virtud casi natural que depende de las líneas del cuerpo, de la manera de ocupar una porción de espacio, de la manera de moverse, de mirar, de sonreír, de estar. Y Allende tenía sentido de la línea perpendicular. Caminaba con aplomo, con la cabeza muy en su sitio, la mirada fría tras las dioptrías, y sabía estar como sólo saben estar las personas muy y muy bien educadas.

Hasta aquí Visconti.

Pero por las ventanas se introducen en la estancia los helados cañones de los fusiles y las pistolas. El alma del metal está cargada de pulpa gris, tiene un cerebro horroroso de ceniza. El espectador hará bien en apartarse instintivamente, porque Peckinpah domina la imaginación de la brutalidad como ningún ser humano la había dominado nunca. El espectador de las películas de Peckinpah tiene que hacerse siempre la pregunta del porqué último de la brutalidad que presencia.

Allende era irritante. Nacido para ser Frei, había querido ser Allende. Masón de convicción, presidía los actos religiosos. Socialista obsesivo y ultimista, creía en el respeto a la norma democrática, incluso como instrumento de construcción del socialismo. Así se explica la urgencia, la furia, la rabia de las balas. Mataban la excepción. Confirmaban la regla. ■

SIXTO CAMARA

Fidel Castro a Allende. Una visita que sobrepasó todos los aspectos protocolarios, que se prolongó durante casi un mes—desde el 10 de noviembre al 4 de diciembre de 1971—, consiguió, por una parte, reconciliar algunos movimientos de extrema izquierda con Allende, pero, por otra, alejó de él a los izquierdistas moderados, que precisamente habían estado junto a Allende porque consideraban que era la mejor defensa contra un régimen cerrado como el de Fidel Castro. Por otra parte, para la derecha—incluyendo ya a la democracia cristiana—, la visita de Castro suponía una utilización propagandística en América de que no hay dos vías distintas al socialismo, sino una sola, y que allendismo y castrismo eran homólogos. Aún mientras Castro estaba aconsejando a los mineros que redujesen sus reivindicaciones y que comprendiesen el alcance del juego político que se estaba desarrollando, las mujeres de la derecha mostraban en Santiago de Chile sus cacerolas vacías.

En el Congreso, donde tan fácilmente se habían aprobado las primeras medidas de nacionalización de Allende, donde se había proclamado el Día de la Dignidad Nacional, la nueva derecha unida comenzaba ya a bloquear todas las medidas sociales, económicas y políticas del gobierno. Las medidas de nacionalizaciones, los créditos para el desarrollo industrial, el proyecto de reforma parlamentaria—la sustitución de las dos Cámaras clásicas por una Asamblea—salían rebotadas del Congreso con mayoría de la derecha. Se había producido un conflicto planteado en forma clásica entre el ejecutivo y el legislativo, semejante en cierta forma al que Nixon está soportando en los Estados Unidos, pero de una violencia grave. Las Cámaras se convertían en una máquina de negar. Más aún, de la resistencia iban a pasar a la ofensiva. En enero de 1972 los diputados acusaban al ministro del Interior de inconstitucionalidad: José Toha había reprimido algunas de las manifestaciones de la derecha. Allende se plegaría a este voto de censura, pero manteniendo a Toha como ministro de Defensa en su nuevo gobierno. Allende pensó durante un tiempo en la convocatoria de un referéndum para resolver este problema de la lucha entre las Cámaras y la Presidencia—de efectos particularmente nocivos en un régimen de constitución mixta como el chileno, donde los poderes entre la Presidencia y las Cámaras están muy repartidos—, pero prefirió buscar de nuevo un pacto con la oposición. Algunos nuevos cambios en el gobierno, algún acuerdo de compromiso sobre el presupuesto, una reducción y un aplazamiento en la lista de las nacionalidades, le permitieron un respiro. Pero la izquierda comenzó a acusarle de nuevo de debilidad. En realidad, era una preocupación total y absoluta por el legalismo.

Legalismo que no resultaba respetado por la oposición más radical. Complots más o menos aislados, atentados y actos de terrorismo comenzaron a producirse. En septiembre de 1971 se habló de una nueva organización militar clandestina; en marzo de 1972 fue detenido un grupo de militares retirados, acusados de complot. Fue el momento en que estalló el asunto de la I. T. & T., la International Telephone and Telegraph. No estalló en Chile, sino en Washington, donde el periodista Jack Anderson descubrió con documentos y testigos que esta poderosa sociedad con intereses en Chile y en toda Hispanoamérica—y, desde luego, en todo el mundo—había estado detrás del movimiento del general Vial en 1970 y había fomentado golpes de Estado y conspiraciones antes y después de la toma de poder de Allende. En Chile se comenzó a atribuir el cambio de posición de la democracia cristiana al peso de los fondos de la I. T. & T. y a la actuación del Departamento de Estado; una larga estancia de Eduardo Frei en los Estados Unidos se conectó con esta conspiración internacional.

Sin embargo, Allende no desesperó de llegar a un acuerdo con la democracia cristiana. Podría suponerse que hasta sus últimos momentos ha perseguido ese imposible, y que ha debido creer que era la única clave de la continuación del régimen sin guerra civil podría ser esa. Pero la democracia cristiana entablaba las negociaciones en situación de fuerza, vencida de su carácter de árbitro nacional. Las interrupciones tácticas para asestar un nuevo golpe. Así, el mes de junio de 1972 interrumpió el proceso de negociaciones para votar en el Congreso la inconstitucionalidad de otro ministro de Allende, Hernán del Canto, y una vez más el Presidente aceptó la decisión. Estas acciones de la oposición iban a tomar más fuerza y más violencia con el estallido de lo que se llamó una huelga de comerciantes, el 21 de agosto, y una serie de manifestaciones en las calles, que requirieron la proclamación del estado de sitio; mes y medio más tarde comenzaría el paro de los transportistas. Conviene señalar que la utilización de la palabra huelga en estos casos puede considerarse como una medida de propaganda: la huelga es realmente un instrumento de clase proletaria, y el cierre de comercios y de empresas de transporte es más bien un «lock-out», en el lenguaje clásico, es decir, una medida contra las clases obreras, o de defensa de las huelgas obreras. El paro de los empresarios de transportes y el de los comerciantes produjo la declaración del estado de urgencia. Pero arrojó un nuevo caos económico, al aumentar la escasez de productos de primera necesidad, que de nuevo fue atribuida por las derechas al gobierno y a su incapacidad económica. El plena huelga, la oposición

parlamentaria se elevó de nuevo contra el gobierno de Allende: esta vez no fue un ministro acusado, sino cuatro. El Presidente aceptó de nuevo. El gobierno dimitió en bloque en solidaridad con los ministros destituidos y el Presidente Allende dio un paso histórico y comprometido: la inclusión de militares de alta graduación en el gobierno formado el 2 de noviembre. Uno de ellos, Carlos Prats, comandante supremo del Ejército, se convertía en ministro del Interior. Es decir, en el encargado directo de combatir las manifestaciones, las huelgas, los desórdenes, los «lock-out». La importancia de este paso histórico es la de que el Presidente «politizó» al Ejército, según se dijo, y según se esgrime ahora para justificar el golpe militar. Si el Ejército se consideraba en Chile como apolítico y simplemente garante de la Constitución, porque su último golpe había sido dado en 1932, la realidad es que su peso en la política del país fue siempre grande. También es preciso explicar que Allende no llamó a los militares por su propia iniciativa, sino como una concesión más a la derecha y muy especialmente a la democracia cristiana. Esta, que no había de-

jado de hacer llamamientos a los militares, consideraba que su inclusión en el gobierno era una garantía. Es decir, que estos ministros aparecían en el seno del gobierno más como controladores y vigilantes que como participantes directos en la experiencia de Allende. El fruto de este pacto fue inmediato: los militares entraron en el gobierno el 2 de noviembre, y el 5 terminaba el paro de los

Unidad Popular aumentó sus diputados: un 44 por 100 de los votos fueron favorables, frente a un 54 para las derechas unidas. A pesar de todas las dificultades, Allende había conseguido ampliar su base popular. Este resultado fue probablemente el que encendió la mecha del golpe de Estado y la contrarrevolución: si las vías legales y electorales no proporcionaban la caída del régimen, habría que buscar la

4-XI-70•11-IX-73: UNA EXPERIENCIA EN UN PROCESO ABIERTO

comerciantes y los empresarios de camiones.

No era suficiente para la oposición, cuyo objetivo directo era la sustitución de Allende. Confiaban en las elecciones legislativas de marzo de 1973. Para acusar a los ministros, el Congreso necesitaba solamente la mayoría simple de votos; pero para destituir al Presidente necesitaba los dos tercios de la Cámara. Las elecciones se forzaron en todos los extremos para conseguir esa mayoría. No sólo no la consiguió, sino que la

salida en el golpe. Los acontecimientos comenzaron a precipitarse desde entonces: salida de los militares del gobierno, destitución por el Senado de dos ministros, terrorismo... Y, simultáneamente, huelga de los mineros de El Teniente, no sólo por su situación económica y social, sino contra la debilidad del Presidente. Los mineros denunciaban ya la inminencia de un golpe de Estado o de una contrarrevolución y exigían que se tomasen medidas inmediatas para prevenirlo.

El 27 de junio, un atentado de extrema derecha ponía en peligro la vida del general Carlos Prats. Aceptado éste en un principio por la oposición, pronto había visto la derecha que Carlos Prats no sólo era legalista, sino que había compartido la experiencia allendista. En efecto, cuando el 28 de junio estalló una rebelión militar, el propio Carlos Prats mandó las fuerzas que lo destruyeron. Es posible pensar que el atentado contra el general estaba minutado en relación con el levantamiento. A partir de este movimiento, llamado el «tancazo» —por que lo inició un grupo de tanques— los acontecimientos van tomando ya la forma clara del golpe de Estado, que el 11 de septiembre se desencadenaría abiertamente y produciría la muerte del Presidente Allende. El espectro de los sucesos de estos setenta días se relata a continuación en una cronología que los sigue directamente.

Pero la historia no termina aquí. El proceso revolucionario y contrarrevolucionario de Chile no es solamente esta experiencia: viene de más atrás, se prolonga hacia el futuro. Está abierto, en este momento, a todas las posibilidades. ■

CHUMY-CHUMEZ

VIA PACIFICA
AL SOCIALISMO
(CARRETERA CORTADA)

CHUMY
CHUMEZ